



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

## Pleno. Sentencia 421/2023

EXP. N.º 03944-2022-PHC/TC

JUNÍN

ANÍBAL ALIAGA DÍAZ,  
representado por SEBASTIÁN  
ROJAS CÓRDOVA

### SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 23 días del mes de agosto de 2023, los magistrados Morales Saravia (presidente), con fundamento de voto, Pacheco Zerga (vicepresidenta), Gutiérrez Ticse, Domínguez Haro, con fundamento de voto, Monteagudo Valdez, con fundamento de voto, y Ochoa Cardich con fundamento de voto, han emitido la presente sentencia. Los magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad con lo votado.

### ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don N. Sebastián Rojas Córdova a favor de don Aníbal Aliaga Díaz contra la resolución de foja 440, de fecha 28 de junio de 2022, expedida por la Primera Sala Penal de Apelaciones Permanente de la Corte Superior de Justicia de Huancayo, que declaró infundada la demanda de *habeas corpus* de autos.

### ANTECEDENTES

Con fecha 25 de marzo de 2022, don N. Sebastián Rojas Córdova interpuso demanda de *habeas corpus* a favor de don Aníbal Aliaga Díaz y la dirigió contra los jueces Esmelin Chaparro Guerra, Bernardo Pimentel Zegarra y Miguel Arias Alfaro, integrantes de la Sala Penal Liquidadora de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín y contra los jueces supremos César San Martín Castro, Iván Sequeiros Vargas, Erazmo Coaguila Chávez, Sonia Torre Muñoz y Norma Carbajal Chávez, integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República (f. 1). Alega la vulneración de los derechos a la tutela procesal efectiva, al debido proceso, a la debida motivación de las resoluciones judiciales, a la defensa y a la libertad personal y del principio de presunción de inocencia.

Se solicita la nulidad de: i) la Resolución 35, Sentencia 110-2019, de fecha 13 de noviembre de 2019 (f. 78), por la cual se condena a don Aníbal Aliaga Díaz, como autor del delito contra la vida, el cuerpo y la



## TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 03944-2022-PHC/TC

JUNÍN

ANÍBAL ALIAGA DÍAZ, representado  
por SEBASTIÁN ROJAS CÓRDOVA

salud, en la modalidad de homicidio calificado, y le impuso veinte años de pena privativa de la libertad efectiva; y ii) la resolución suprema, de fecha 5 de abril de 2021, mediante la cual se declaró no haber nulidad en la resolución precitada (f. 90) y que, en consecuencia, se disponga la realización de un nuevo juicio oral a cargo de otro tribunal superior y se ordene su inmediata libertad (Expediente 2274-2012-0-1501-JR-PE-01/R.N. 385-2020).

El recurrente refiere que la condena penal adolece de motivación suficiente ya que se basa específicamente en pruebas indiciarias; que no existe motivación respecto de la secuencia de la prueba indiciaria, ya que no existieron medios probatorios suficientes que les haga concluir con certeza y seguridad sobre la culpabilidad del favorecido sea como autor o autor mediato del hecho delictuoso; que aceptan que existió delito, pero que lo que no está claro es quien realizó el acto de homicidio; que no hay manera de vincular las pruebas objetivas con el favorecido, esto es, no hay conexión del hecho base con el hecho final.

Agrega que los jueces demandados han valorado medios de prueba y declaraciones testimoniales que se habrían obtenido de forma ilegítima, sin participación y conocimiento expreso del condenado; que en el auto de vista, la Sala Penal resalta que los hechos que se imputan sucedieron el 24 de febrero de 2008, pero la formalización de la denuncia data del 19 de octubre de 2011 y registrada en el Poder Judicial el 25 de octubre de 2011, es decir, después de tres años y siete meses y el auto de apertura de instrucción se dictó el 20 de julio de 2012, después de ocho meses y 25 días, todo ello con retardo excesivo.

Manifiesta que no existió persistencia incriminatoria ya que a pesar de que la Sala Suprema, cuando en una ocasión declaró la nulidad de la primera sentencia absolutoria, ordenó que se realicen algunas testimoniales, la instancia inferior no lo realizó, pues la mayoría de testigos no concurrieron al juicio y los que concurrieron señalaron cuestiones diferentes a lo manifestado a nivel preliminar, por lo que no se cumplió con los criterios de ausencia de credibilidad subjetiva, verosimilitud y persistencia incriminatoria.

A foja 14 de autos, el Sexto Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Huancayo, mediante Resolución 1, de fecha 25 de marzo de 2022, admitió a trámite la demanda.



## TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 03944-2022-PHC/TC

JUNÍN

ANÍBAL ALIAGA DÍAZ, representado  
por SEBASTIÁN ROJAS CÓRDOVA

El procurador público a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial, al contestar la demanda, señaló que la defensa técnica del favorecido al interponer el recurso de nulidad contra la sentencia de fecha 13 de noviembre de 2019, no alegó como agravio la deficiente o inexistente motivación de la prueba indiciaria. Por tanto, no se cumple el requisito de firmeza exigido en los procesos constitucionales de *habeas corpus* contra resolución judicial y que los agravios presentados no van dirigidos a atacar la presunta vulneración al debido proceso o tutela efectiva, sino a la valoración de los medios de prueba admitidos en el proceso que realizó el *ad quo*, pero de la revisión de la sentencia se advierte que se ha desarrollado la motivación de cada medio probatorio ingresado al proceso en los considerandos que fundamentan su resultado (f. 105).

El Sexto Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Huancayo, mediante resolución de fecha 25 de abril de 2022 (f. 409), declaró infundada la demanda por considerar que la sentencia condenatoria se encuentra debidamente motivada porque se valoraron los medios probatorios actuados en juicio de forma individual, luego de forma conjunta en el numeral octavo de la mencionada sentencia, previamente se indica que se recurre a la prueba indiciaria, enumerando cada uno de los indicios a considerarse. Asimismo, en la citada resolución suprema se respondieron cada uno de los cuestionamientos planteados en el recurso de nulidad. Además que, para dilucidarse el objeto del proceso debe disgregarse el juicio jurisdiccional en tres tópicos “escena criminal, móviles delictivos y perfil psicológico y conclusiones probatorias”, los que determinan que la motivación es suficiente.

La Sala Superior competente confirmó la resolución apelada por similares fundamentos (f. 440).

## FUNDAMENTOS

### Delimitación del petitorio

1. El objeto de la demanda es que se declaren nulas: i) la Resolución 35, Sentencia 110-2019, de fecha 13 de noviembre de 2019, por la cual se condena a don Aníbal Aliaga Díaz como autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en su modalidad de homicidio calificado, y le impuso veinte años de pena privativa de la libertad efectiva; y ii) la resolución suprema (R.N. 385-2020), de fecha 5 de abril de 2021, mediante la cual



## TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 03944-2022-PHC/TC

JUNÍN

ANÍBAL ALIAGA DÍAZ, representado  
por SEBASTIÁN ROJAS CÓRDOVA

se declaró no haber nulidad en la resolución precitada y que, en consecuencia, se disponga la realización de un nuevo juicio oral a cargo de otro tribunal superior y se ordene su inmediata libertad (Expediente 2274-2012-0-1501-JR-PE-01).

2. Se alega la vulneración de los derechos a la tutela procesal efectiva, al debido proceso, a la debida motivación de las resoluciones judiciales, a la defensa y a la libertad personal.

### **Análisis del caso en concreto**

3. La Constitución establece en el artículo 200, inciso 1, que a través del *habeas corpus* se protege tanto la libertad personal como los derechos conexos a ella. No obstante, debe tenerse presente que no cualquier reclamo que alegue *a priori* la afectación del derecho a la libertad personal o derechos conexos puede reputarse efectivamente como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario analizar previamente si los actos denunciados afectan el contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados.
4. Conforme se ha dispuesto en reiterada jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, la determinación de la responsabilidad penal es competencia exclusiva de la judicatura ordinaria, aspecto que también involucra la subsunción de la conducta y la graduación de la pena dentro del marco legal.
5. Tampoco le compete a la justicia constitucional evaluar la mejor interpretación de la ley penal sobre la base de consideraciones estrictamente legales, ni evaluar el cumplimiento de los criterios jurisprudenciales que rigen en la justicia ordinaria.
6. No obstante, ello no implica que la actividad probatoria llevada a cabo al interior de un proceso penal quede fuera de todo control constitucional. Negarse a conocer los aspectos constitucionales de la prueba sería vaciar de contenido el artículo 9 del Nuevo Código Procesal Constitucional que expresamente establece como objeto de tutela el derecho “a probar”.
7. Este Tribunal Constitucional muy a despecho del argumento en contrario, ha indicado que el derecho a probar importa que los medios probatorios sean valorados de manera adecuada (sentencia emitida en el Expediente



## TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 03944-2022-PHC/TC

JUNÍN

ANÍBAL ALIAGA DÍAZ, representado  
por SEBASTIÁN ROJAS CÓRDOVA

06712-2005-PHC/TC, fundamento 15).

8. En los casos penales, este aspecto necesariamente debe complementarse –para el mejor análisis en sede constitucional– con el deber de debida motivación de las resoluciones de los jueces y que ha sido también desarrollado por el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia (por todos ver: STC 00728-2008-PHC/TC); el mismo que, a su vez, se encuentra estrechamente vinculado con el principio de presunción de inocencia que informa la función jurisdiccional y cuya desvirtuación dependerá de la adecuada motivación que el juzgador desarrolle para tal efecto.
9. En virtud de lo expresado, los argumentos expuestos por cualquier beneficiario que invoque tutela constitucional deben ser analizados con el mayor detalle posible para determinar si hay razones o no para controlar el aludido derecho “a probar” y solo en caso sea evidente la irrelevancia del control constitucional de la prueba se debe optar por su improcedencia.
10. En el presente caso, si bien se invocan los derechos a la debida motivación, presunción de inocencia, entre otros, la argumentación que la parte recurrente presenta en su demanda y recurso de agravio constitucional no contiene una suficiente relevancia constitucional que permita a este colegiado emitir una sentencia de fondo con relación a dichas alegaciones.
11. El recurrente cuestiona aspectos como: (i) que la condena penal adolece de motivación suficiente, ya que se basa específicamente en pruebas indiciarias; (ii) que no existe motivación respecto de la secuencia de la prueba indiciaria, ya que no existieron medios probatorios suficientes que les haga concluir con certeza y seguridad sobre la culpabilidad del favorecido; (iii) que aceptan que existió delito, pero que lo que no está claro es quién realizó el acto de homicidio; (iv) que no hay manera de vincular pruebas objetivas con el favorecido, esto es, no hay conexión del hecho base con el hecho final; (v) que los jueces demandados han valorado medios de prueba y declaraciones testimoniales que se habrían obtenido de forma ilegítima, sin participación y conocimiento expreso del condenado; (vi) que en el auto de vista, la Sala Penal resalta que los hechos que se imputan sucedieron el 24 de febrero de 2008, pero la formalización de la denuncia data del 19 de octubre de 2011 y registrada



**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

EXP. N.º 03944-2022-PHC/TC

JUNÍN

ANÍBAL ALIAGA DÍAZ, representado  
por SEBASTIÁN ROJAS CÓRDOVA

en el Poder Judicial el 25 de octubre de 2011, es decir, después de tres años y siete meses y el auto de apertura de instrucción se dictó el 20 de julio de 2012, después de ocho meses y 25 días, todo ello con retardo excesivo; y (vii) que no existió persistencia incriminatoria, ya que a pesar de que la Suprema, cuando en una ocasión declaró la nulidad de la primera sentencia absolutoria, ordenó que se realicen algunas testimoniales, la instancia inferior no lo realizó, pues la mayoría de testigos no concurrió al juicio y los que concurrieron señalaron cuestiones diferentes a lo manifestado a nivel preliminar. Tal como se aprecia *supra*, lo que en puridad pretende el demandante es el reexamen de lo resuelto en sede ordinaria, siendo esa la razón concreta por la que se declaró improcedente la presente causa.

12. Por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente no está referida al contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el *habeas corpus*, resulta de aplicación el artículo 7, inciso 1 del Nuevo Código Procesal Constitucional.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

**HA RESUELTO**

Declarar **IMPROCEDENTE** la demanda de *habeas corpus*.

Publíquese y notifíquese.

SS.

**MORALES SARAVIA  
PACHECO ZERGA  
GUTIÉRREZ TICSE  
DOMÍNGUEZ HARO  
MONTEAGUDO VALDEZ  
OCHOA CARDICH**

**PONENTE GUTIÉRREZ TICSE**



## TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 03944-2022-PHC/TC

JUNÍN

ANÍBAL ALIAGA DÍAZ, representado  
por SEBASTIÁN ROJAS CÓRDOVA

### **FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO MORALES SARAVIA**

Si bien estoy de acuerdo con el sentido del fallo, no comparto las razones y argumentos de los fundamentos 6 al 10 de la sentencia relativos a que la jurisdicción constitucional puede realizar un control constitucional sobre la actividad probatoria llevada a cabo al interior de un proceso penal al ser uno de los elementos de la tutela procesal efectiva expresados en el art. 9 del Nuevo Código Procesal Constitucional (NCPCo). Considero que, conforme a nuestro marco constitucional, competencial y a nuestra jurisprudencia reiterada, el juez constitucional no debe realizar una nueva valoración de las pruebas que ya fueron objeto de análisis en un proceso ordinario puesto que terminaría sustituyendo al juez penal.

El Tribunal Constitucional ha desarrollado en su jurisprudencia los derechos a la tutela jurisdiccional y debido proceso reconocidos en el artículo 139 inciso 1 de la Constitución. Así, siguiendo al Tribunal Constitucional español, ha señalado que la tutela jurisdiccional supone el derecho de acceso a los órganos de justicia, así como la eficacia de lo decidido en la sentencia. Igualmente, el debido proceso presupone la observancia de los derechos fundamentales esenciales del procesado y que se trata de un derecho de carácter instrumental. Siendo así, este se encuentra conformado por un conjunto de derechos básicos procesales que son ejercidos en el desarrollo de un proceso jurisdiccional.

Sin embargo, pese a la claridad con que la Constitución configuro los mencionados derechos el artículo 4 del Código Procesal Constitucional (actual artículo 9 del Nuevo Código Procesal Constitucional) regulo un nuevo derecho de orden legal denominado tutela procesal efectiva, que comprendería el acceso a la justicia y el debido proceso. Esta configuración legal se aparta de la autonomía constitucional que gozan el derecho a tutela jurisdiccional y debido proceso y no es la más conveniente ni correcta. En efecto, el llamado derecho a la tutela procesal efectiva, reconocido sólo en la ley, incorpora como parte de su contenido a un derecho constitucional, debido proceso, y se superpone al derecho a la tutela jurisdiccional también de rango constitucional (acceso a la justicia y eficacia de lo decidido). De igual manera, este derecho, reconocido sólo en la ley, contiene una serie de derechos constitucionales como el de defensa, a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni sometido a procedimientos distintos a los previstos en la ley, y la imposibilidad de revivir procesos fenecidos.



## TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 03944-2022-PHC/TC  
JUNÍN  
ANÍBAL ALIAGA DÍAZ, representado  
por SEBASTIÁN ROJAS CÓRDOVA

Por consiguiente, resulta adecuado señalar que el llamado derecho a probar forma parte del contenido esencial del derecho al debido proceso y no de la llamada tutela procesal efectiva, a pesar de que así lo dispone, equivocadamente, el Nuevo Código Procesal Constitucional.

El derecho a probar, si bien goza de protección constitucional (Sentencia recaída en el expediente 01014-2007-PHC, fundamento 8), lo cierto es que no todo su contenido amerita un control del juez constitucional, pues no se puede dejar de lado que su configuración es de orden legal. Al respecto, el derecho a probar constituye un derecho complejo que está compuesto por el derecho a ofrecer medios probatorios que se consideren necesarios, a que estos sean admitidos, adecuadamente actuados, que se asegure la producción o conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada de los medios probatorios y que estos sean valorados de manera adecuada y con la motivación debida, con el fin de darle el mérito probatorio que tenga en la sentencia. La valoración de la prueba debe estar debidamente motivada por escrito, con la finalidad de que el justiciable pueda comprobar si dicho mérito ha sido efectiva y adecuadamente realizado. Ahora bien, no todos los supuestos de su contenido merecen protección a través del amparo o habeas corpus, por lo que, solo serán amparables aquellas pretensiones que estén referidas a una manifiesta vulneración de tales supuestos y que sean de competencia del juez constitucional. En ningún caso se puede pretender la formación, en la práctica, de una estación probatoria con la que no cuentan tales procesos constitucionales. Ello se desprende de la interpretación sistemática del artículo 9 del NCPCo con los artículos 7.1, 1 (primer párrafo) y 13 del mismo cuerpo normativo.

En ese sentido, este Pleno ha sostenido que el derecho a probar implica la posibilidad de postular, dentro de los límites y alcances que la ley reconoce, los medios probatorios necesarios para justificar los argumentos que el justiciable esgrime a su favor. En este sentido, se vulnera el derecho a probar cuando en el marco del proceso se ha dispuesto la actuación o la incorporación de determinado medio probatorio, pero ello no es llevado a cabo, o cuando la parte (y no la contraparte) solicita la actuación de algún medio probatorio, pero dicha solicitud es rechazada de manera arbitraria (Sentencia 322/2022 recaída en el expediente 00477-2018-PHC, fundamento 8).

Como se advierte, la judicatura constitucional está habilitada para analizar los



## TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 03944-2022-PHC/TC  
JUNÍN  
ANÍBAL ALIAGA DÍAZ, representado  
por SEBASTIÁN ROJAS CÓRDOVA

supuestos de ofrecimiento, admisión, producción o conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada de los medios probatorios y su motivación en la valoración; sin embargo, lo que el juez constitucional no puede realizar es una nueva valoración de las pruebas, que ya fueron objeto de análisis en un proceso subyacente.

Así pues, el Pleno del Tribunal Constitucional, interpretando el respectivo marco constitucional y legal, en su conjunto, ha sostenido en reiterados casos que las pretensiones que cuestionan la valoración probatoria y su suficiencia dentro de un proceso penal, e incluso, aquellas que buscan un reexamen o revaloración de los medios probatorios por parte de esta jurisdicción, devienen en improcedentes, en aplicación del artículo 7.1 del NCPCo (antes, art. 5.1.) al ser materias ajenas a la tutela del *habeas corpus* (Sentencia 205/2022 recaída en el expediente 02011-2021-HC, fundamento 3; Sentencia 388/2022 recaída en el expediente 03223-2021-PHC, fundamento 3; entre otras).

En el presente caso, se plantean cuestionamientos relativos a la valoración de pruebas y su suficiencia, así como al criterio de los juzgadores aplicados al caso concreto. No obstante, dichos cuestionamientos resultan manifiestamente incompatibles con la naturaleza del proceso constitucional de *habeas corpus*, pues recaen sobre asuntos que corresponde dilucidar a la judicatura ordinaria tal como ha sido realizado a través de las resoluciones cuestionadas.

Por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente no está referida al contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el *habeas corpus*, resulta de aplicación el artículo 7, inciso 1, del Nuevo Código Procesal Constitucional.

**S.**

**MORALES SARAVIA**



**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

EXP. N.º 03944-2022-PHC/TC  
JUNÍN  
ANÍBAL ALIAGA DÍAZ, representado  
por SEBASTIÁN ROJAS CÓRDOVA

**FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO  
DOMÍNGUEZ HARO**

En el presente caso, debo precisar que no suscribo los fundamentos 6 al 10 de la sentencia, en la medida que no estimo que sean pertinentes para resolver la causa de autos.

**S.**

**DOMÍNGUEZ HARO**



**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

EXP. N.º 03944-2022-PHC/TC  
JUNÍN  
ANÍBAL ALIAGA DÍAZ, representado  
por SEBASTIÁN ROJAS CÓRDOVA

**FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO  
MONTEAGUDO VALDEZ**

Emito el presente fundamento de voto, pues discrepo de la tesis en virtud de la cual el contenido constitucionalmente protegido del derecho a probar conlleva que el Tribunal Constitucional pueda ingresar en una nueva valoración de la prueba válidamente obtenida y constitucionalmente incorporada al proceso; ello supondría subrogarse en competencias exclusivas de la jurisdicción ordinaria, afectándose el principio de corrección funcional.

**S.**

**MONTEAGUDO VALDEZ**



## TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 03944-2022-PHC/TC

JUNÍN

ANÍBAL ALIAGA DÍAZ, representado  
por SEBASTIÁN ROJAS CÓRDOVA

### FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO OCHOA CARDICH

Con el debido respeto por la posición de mis distinguidos colegas, emito el presente fundamento de voto en tanto discrepo de una parte de la fundamentación contenida en la ponencia, es especial, en relación con lo referido al control de la motivación de las resoluciones judiciales. Las razones que sustentan mi posición se resumen esencialmente en lo siguiente:

1. La debida motivación de las resoluciones judiciales implica que toda decisión judicial debe presentar tanto una adecuada **justificación interna** (por ende, la conclusión jurídica a la que arriba el juzgador debe inferirse de las premisas normativas y fácticas que fueron tomadas en consideración al resolver) como una debida **justificación externa** (en este sentido, las premisas normativa y fáctica, en sí mismas, también deben encontrarse adecuadamente justificadas, por lo que no podrían tener un contenido írrito o ser enunciadas de modo solo retórico, antojadizo o arbitrario).
2. Pueden darse diferentes casos de insuficiente **motivación interna**; entre ellos tenemos, por ejemplo, supuestos en los que se arriba a un fallo prescindiendo de alguna de las premisas requeridas (la normativa o la fáctica), cuando el fallo no se deduce inferencial o lógicamente de las referidas premisas, cuando la interpretación es meramente circular (es decir, tautológica o si incurre en la falacia de petición de principio) o también si la motivación es meramente aparente (por ejemplo, si las razones ofrecidas no tienen que ver con el caso resuelto o si solo se hace un ejercicio retórico de justificación, sin base legal o fáctica). Relacionados con estos supuestos, en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se ha hecho referencia, por ejemplo, a vicios de motivación inexistente, aparente o insuficiente. Otro supuesto podría encontrarlo en las alegaciones referidas al principio de congruencia, que garantiza que el órgano jurisdiccional resuelva con base en lo demandado, impugnado o alegado por las partes (o que exista relación entre acusación y condena, entre otros supuestos).
3. Respecto de la **motivación externa**, esta garantía involucra, básicamente, que tanto la premisa normativa como la fáctica, cada una



## TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 03944-2022-PHC/TC

JUNÍN

ANÍBAL ALIAGA DÍAZ, representado  
por SEBASTIÁN ROJAS CÓRDOVA

de ellas, se encuentre adecuadamente motivada. A este respecto es necesario precisar que, por lo general, los problemas relacionados con las premisas normativa y fáctica suelen remitirnos a asuntos que, inicialmente, son de competencia de la judicatura ordinaria y no de la judicatura constitucional. En este sentido, por ejemplo, establecer cuál es la norma de rango legal más pertinente o el artículo más adecuado para resolver una controversia de carácter civil o laboral; cómo debe interpretarse (es decir, cuál es el significado) una disposición de alcance penal o mercantil; si algo debe ser calificado como hurto simple o agravado; o si se debe tener por probado o no algo que alegado por las partes en el marco de procesos de familia o administrativos, no son cuestiones que inicialmente le compete dilucidar a la judicatura constitucional. No obstante, también es cierto que la judicatura constitucional sí tiene competencia para abordar cuestiones específicamente referidas a amenazas o vulneraciones de derechos fundamentales, por lo que es necesario esclarecer, de modo más preciso, qué es aquello que puede ser objeto de revisión a través de los procesos de tutela de derechos iniciados contra resoluciones judiciales, en especial cuando se invoca el derecho a la debida motivación.

4. En relación con los eventuales problemas relacionados con la **justificación de las premisas normativas**, estas pueden ser básicamente de dos tipos: (1) relacionados con la relevancia o determinación de la disposición normativa aplicable al caso y (2) relacionados con la debida interpretación de las disposiciones utilizadas. Desde luego, escoger la regulación pertinente para un caso legal u ordinario, e interpretar correctamente la norma legal son cuestiones que prima facie no son de competencia de la judicatura constitucional, a menos que haya una cuestión de carácter constitucional comprometida. Siendo así, es necesario precisar que los vicios que pueden invocarse y analizarse en sede constitucional, a efectos de que no se infrinjan competencias de la judicatura ordinaria, son aquellos relacionados con el principio de legalidad (por ejemplo, si se discute en torno a la relevancia o la determinación de la disposición normativa aplicable al caso y se alega que las disposiciones aplicadas habrían sido derogadas, declaradas inconstitucionales o que nunca integraron el ordenamiento jurídico) o también cuando se haya



## TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 03944-2022-PHC/TC

JUNÍN

ANÍBAL ALIAGA DÍAZ, representado  
por SEBASTIÁN ROJAS CÓRDOVA

incurrido en algún vicio de constitucionalidad (déficits de derechos fundamentales o de bienes constitucionales), por ejemplo, si se cuestiona a la interpretación efectuada de las disposiciones legales, pues ellas son incompatibles con la Constitución (porque no se han tomado en cuenta derechos, principios, garantías institucionales u otros bienes constitucionales que podrían verse implicados; no se les dio un contenido adecuado o se hizo un mal ejercicio de ponderación de bienes constitucionales).

5. De otro lado, en lo que se refiere a la adecuada **justificación de las premisas fácticas**, ella se refiere esencialmente a que la motivación debe contener: (1) una adecuada justificación respecto de aquello que se considera como probado (o como no probado) y (2) una adecuada calificación jurídica respecto de tales hechos.
  
6. Nuevamente, considerando que, con base en una eventual revisión de la motivación de las premisas sobre los hechos del caso, la judicatura constitucional podría terminar interfiriendo en asuntos propiamente legales o que corresponden eminentemente a la judicatura ordinaria, el Tribunal Constitucional ha efectuado importantes salvedades sobre este tema (Sentencia 03413-2021-PA/TC):

11. Es oportuno indicar que cuando se objeta la *motivación externa* de una decisión judicial, específicamente por defectos en la justificación de su *premisa fáctica*, el derecho fundamental que puede invocarse y debe analizarse en sede constitucional, a efectos de que no se infrinjan competencias de la judicatura ordinaria, es el derecho fundamental a la prueba (y no cualquier cuestión probatoria, de carácter meramente legal u ordinario, que pudiera invocarse). En otras palabras, en estos casos (cuando se aleguen problemas de motivación externa relacionados con la justificación de las premisas normativas) únicamente constituyen supuestos de manifiesto agravio del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales los cuestionamientos relacionados con los contenidos constitucionalmente protegido del derecho a la prueba.

12. El Tribunal Constitucional ha indicado que el derecho a la prueba es “un derecho complejo que está compuesto por el derecho a *ofrecer medios* probatorios que se consideren necesarios; a que éstos *sean admitidos*, adecuadamente actuados, que *se asegure la producción o conservación* de la prueba a partir de la *actuación anticipada* de los medios probatorios, y



## TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 03944-2022-PHC/TC

JUNÍN

ANÍBAL ALIAGA DÍAZ, representado  
por SEBASTIÁN ROJAS CÓRDOVA

que éstos sean *valorados* de manera adecuada y con la motivación debida, con el fin de darle el mérito probatorio que tenga en la sentencia. La valoración de la prueba debe estar debidamente motivada por escrito, con la finalidad de que el justiciable pueda comprobar si dicho mérito ha sido efectiva y adecuadamente realizado” (cfr. Sentencia 06712-2005-PHC/TC, fundamento 15, resaltado agregado). En este sentido, es importante precisar que, con base en el derecho a la prueba, no le compete a la judicatura del amparo reemplazar a los jueces ordinarios en la admisión, la actuación o la valoración de los medios probatorios cuando le compete evaluar la conformidad constitucional de un proceso ordinario. Su función es, si fuera el caso, establecer si existió un manifiesto agravio del derecho fundamental a la prueba y, si este fue acreditado, devolver la controversia a la sede ordinaria para que allí se emita una nueva resolución ajustada a Derecho.

13. Además de los contenidos antes mencionados (*admisión, conservación, actuación y valoración*), es necesario precisar que el derecho constitucional a la prueba comprende, asimismo, la posibilidad de cuestionar la presencia de *pruebas ilícitas* o *pruebas prohibidas* en el proceso (Sentencias 00445-2018-PHC y 00655-2010-PHC) o la existencia de una indebida inferencia para el caso de las pruebas indiciarias (Sentencia 00728-2008-PHC), entre otros supuestos.

7. De manera complementaria, el Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de referirse las características que debe cumplir la prueba o la actividad probatoria en el marco de los procesos judiciales (Sentencia 01014-2007-HC/TC):

12. Por ello, la prueba capaz de producir un conocimiento cierto o probable en la conciencia del juez debe reunir las siguientes características: (1) *Veracidad objetiva*, según la cual la prueba exhibida en el proceso debe dar un reflejo exacto de lo acontecido en la realidad; asimismo, prima facie, es requisito que la trayectoria de la prueba sea susceptible de ser controlada por las partes que intervienen en el proceso, lo que no supone desconocer que es al juez, finalmente, a quien le corresponde decidir razonablemente la admisión, exclusión o limitación de los medios de prueba. De esta manera, se puede adquirir certeza de la idoneidad del elemento probatorio, pues éste se ajustará a la verdad de lo ocurrido y no habrá sido susceptible de manipulación; (2) *Constitucionalidad de la actividad probatoria*, la cual implica la proscripción de actos que violen el contenido esencial de los derechos fundamentales o transgresiones al orden jurídico en la obtención, recepción y valoración de la prueba; (3) *Utilidad de la prueba*, característica que vincula directamente a la prueba con el hecho presuntamente delictivo que se habría cometido, pues con esta característica se verificará la utilidad de la prueba siempre y cuando ésta produzca certeza judicial para la resolución o aportación a la resolución del caso concreto; (4) *Pertinencia de la prueba*, toda vez que la prueba se reputará pertinente



## TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 03944-2022-PHC/TC

JUNÍN

ANÍBAL ALIAGA DÍAZ, representado  
por SEBASTIÁN ROJAS CÓRDOVA

si guarda una relación directa con el objeto del procedimiento, de tal manera que si no guardase relación directa con el presunto hecho delictivo no podría ser considerada una prueba adecuada.

8. Así considerado, a efectos de que la judicatura constitucional no termine reemplazando a la justicia ordinaria en sus funciones legales u ordinarias y se termine convirtiendo en una especie de “cuarta instancia”, debe precisarse que su competencia, al analizar la motivación probatoria, no es la de dar por probados (o no) determinados hechos, ni la de valorarlos o calificarlos jurídicamente con base en criterios infraconstitucionales, sino básicamente garantizar que, en el marco de los procesos judiciales ordinarios, **se haya respetado escrupulosamente las garantías relacionadas con el derecho a la prueba, y que las pruebas o la actividad probatoria desplegadas no hayan trasgredido otros derechos o bienes constitucionales.**
9. De este modo, en el ámbito de los procesos de tutela de derechos contra resoluciones judiciales no cabe, de un lado –so pretexto de analizar el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales– incurrir en casos de reexamen o revaloración de asuntos meramente legales o probatorios, ni del otro –con la excusa de no incurrir en casos de reexamen o revaloración probatoria– desproteger supuestos en los que pudiera haber una vulneración iusfundamental del derecho a la prueba, o al debido proceso, respecto de aquellos contenidos que sí resultan tutelables en sede constitucional.
10. Así visto, recapitulando, en lo que corresponde a la motivación en materia probatorio, cabe acudir a la judicatura constitucional con la finalidad de analizar si se vulneró el derecho a la prueba, que típicamente comprende el derecho a ofrecer medios probatorios que se consideren necesarios; a que éstos sean admitidos, adecuadamente actuados, que se asegure la producción o conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada de los medios probatorios, y que éstos sean valorados de manera adecuada y con la motivación debida, con el fin de darle el mérito probatorio que tenga en la sentencia. Todo lo anterior, desde luego, tiene como presupuesto las características de utilidad, pertinencia y constitucionalidad que deben tener los medios



## TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 03944-2022-PHC/TC

JUNÍN

ANÍBAL ALIAGA DÍAZ, representado  
por SEBASTIÁN ROJAS CÓRDOVA

probatorios, pues también es cierto que no toda prueba ofrecida o admitida, dependiendo de las circunstancias del caso, deberá ser necesariamente admitida o actuada, pues puede ser irrelevante, inconducente o incluso conculcar algún derecho o bien constitucionalmente protegido, pero en cualquier caso hay que explicarlo o motivarlo y no simplemente dar por hecho una determinada decisión en torno de la prueba.

11. Además de los contenidos antes mencionados (*admisión, conservación, actuación y valoración*), el derecho constitucional a la prueba comprende, asimismo, la posibilidad de cuestionar la presencia de *pruebas ilícitas o pruebas prohibidas* en el proceso (Sentencias 00445-2018-HC y 00655-2010-HC) o la existencia de una indebida inferencia para el caso de las pruebas indiciarias (Sentencia 00728-2008-PHC), entre otros supuestos.
12. Incluso más, este Tribunal ha explicitado algunos estándares en los que se requiere una justificación específica y/o calificada, a través del establecimiento de doctrina jurisprudencial. Este es el caso, por ejemplo, de los supuestos en los que la sentencia dispone una medida de prisión preventiva (Sentencia 03248-2019-PHC/TC), supuestos en los cuales la judicatura penal dispone una limitación severa del derecho a la libertad personal, sin haberse arribado a una sentencia condenatoria, por lo que, sin entrar a reexaminar o revalorar lo resuelto en sede penal, es posible verificar en sede constitucional si la motivación cumplió con los estándares constitucionales y convencionales exigidos para decidir este tipo de intervenciones iusfundamentales (es decir, cabe verificar si la motivación es calificada y si no incurre en algún déficit iusfundamental).
13. Siendo este el caso, con base en lo aquí indicado, coincide en que la presente demanda debe ser declarada improcedente.

**S.**

**OCHOA CARDICH**